

Señores

**JUZGADO SEGUNDO (2º) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**

J02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

**REFERENCIA:** PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL  
**DEMANDANTE:** DIANA PATRICIA GONZÁLEZ PRECIADO Y OTROS.  
**DEMANDADO:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Y OTROS.  
**RADICACIÓN:** 760013103002-2023-00261-00

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando calidad de apoderado general de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, con NIT 860.037.013-6, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con dirección electrónica de notificaciones [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co); como se acredita con el poder general concedido mediante escritura pública No. 13771 de la Notaría 29 de Bogotá que se adosa mediante este escrito al expediente, encontrándome dentro del término legal oportuno para hacerlo, con el debido respeto me dirijo a Usted señor Juez, con el fin de **CONTESTAR LA DEMANDA** de Responsabilidad Civil Extracontractual promovida por DIANA PATRICIA GONZÁLEZ PRECIADO Y OTROS en contra de mi representada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

**I. OPORTUNIDAD**

Se precisa que la demanda se descubre dentro de término teniendo en cuenta la contabilización del mismo conforme a lo establecido en el artículo 301 del Código General del Proceso. Así, el artículo de la mencionada norma señala:

***“NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. (...) Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personería antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte será notificada por estado de tales providencias (...).”*** (subrayado fuera del texto original).

Aplicando la norma al caso concreto, se tiene que el día 25 de abril de 2024 su Despacho notificó el auto

mediante el cual reconoció al suscrito personería para actuar en representación de la compañía aseguradora y, consecuentemente, se notificó por conducta concluyente a mi representada, motivo por el cual el término de traslado de la demanda inició a contabilizarse el día 26 de abril. Adicionalmente a lo anterior, se resalta que existieron dos días festivos en el mes de mayo, concretamente los días 1 y 13 del mencionado mes, motivo por el cual el término para contestar la demanda termina el día 27 de mayo de 2024.

Por lo anterior, es claro que la presente contestación se radica dentro del término contemplado por la ley.

## II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**AL “1”:** Este hecho contiene distintas afirmaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- A mi representada no le consta la ocurrencia del supuesto accidente de tránsito, de modo que deberá probarse lo afirmado según el principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.
- A mi representada tampoco le consta que la supuesta ocurrencia del accidente de tránsito se deba a un actuar imputable al señor Walter Hernán Vargas Cortes, de modo que deberá probarse lo afirmado según el principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.
- A mi representada no le consta que la señora Diana Patricia González Preciado haya sido pasajera del vehículo de placas ETK 163, de modo que deberá probarse lo afirmado según el principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.
- A mi representada no le consta que la señora Diana Patricia González Preciado haya sido las supuestas lesiones señaladas a raíz del accidente de tránsito que afirma ocurrió el día 4 de octubre de 2022, de modo que deberá probarse lo afirmado según el principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.

**AL “2”:** Es cierto, así puede verificarse en el registro civil de nacimiento de la señora Diana González.

**AL “3”:** Es cierto, así puede verificarse en los registros civiles de nacimiento de Juan Carlos Grisales y Geraldine Grisales.

**AL “4”:** Es cierto, conforme al registro civil de matrimonio aportado con la demanda.

**AL “5”:** Es cierto, así puede verificarse en el registro civil de nacimiento de la señora Diana González.

**AL “6”:** Es cierto, así puede verificarse en los registros civiles de nacimiento de Cindy, Rodrigo y Diego González Preciado.

**AL “7”:** Es cierto, conforme a los registros civiles de nacimiento aportados con la demanda.

**AL “8”:** A mi representada no le consta lo mencionado en este hecho, teniendo en cuenta que hace referencia a la composición del núcleo familiar de la demandante siendo un hecho sobre su vida íntima. Por lo tanto la parte demandante deberá acreditarlo conforme al deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.

**AL “9”:** El presente hecho contiene diversas afirmaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- No es cierto, no obra en el expediente ninguna prueba que dé cuenta de la actividad laboral desempeñada por la señora Diana González al momento del supuesto accidente.
- No es cierto, no obra en el expediente ninguna prueba sobre los ingresos que supuestamente percibía la demandante al momento del accidente.

**AL “10”:** No es cierto, no se encuentra acreditado dentro del plenario que la señora Diana Patricia González se desplazara como pasajera del vehículo de placa ETK 163 el día 4 de octubre de 2022. La parte demandante basa esta afirmación de forma exclusiva en el IPAT, documento que no tiene el carácter probatorio requerido para probar la existencia del hecho aquí mencionado.

**AL “11”:** Este hecho contiene varias afirmaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- A mi representada no le consta que el señor Walter Vargas se encontrara conduciendo el vehículo de placas ETK-163. Por lo tanto, la parte demandante deberá acreditarlo conforme al deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.
- No es cierto, que el señor Walter Vargas pasara sobre el reductor de velocidad ubicado en la vía a una velocidad excesiva pues no existe prueba de ello e incluso si se decidiera otorgar valor probatorio al IPAT, se evidencia que el mismo no consigna la mencionada hipótesis como posible causa del supuesto accidente.
- No es cierto que producto de haber pasado sobre el reductor ubicado en la vía a exceso de velocidad, la señora Diana González haya sido expulsada de su asiento y cayera dentro del vehículo ocasionando el supuesto accidente de tránsito.

**AL “12”:** A mi representada no le consta lo mencionado en este hecho, por lo tanto la parte demandante deberá acreditarlo conforme al deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.

**AL “13”:** A mi representada no le consta lo mencionado en este hecho, teniendo en cuenta que con la demanda no se aportaron los documentos que respaldan esta afirmación.

**AL “14”:** No es cierto, que la causa del supuesto accidente haya sido la de conducir a exceso de velocidad, no estar atento a la vía, no acatar normas y señales de tránsito, ejercer una actividad peligrosa, ni conducir con imprudencia e impericia. Incluso si se decidiera otorgar valor probatorio al IPAT, se evidencia que el

mismo consigna como hipótesis del supuesto accidente la falta de señalización y pintura en el reductor de velocidad.

**AL “15”:** A mi representada no le consta lo mencionado en este hecho, por lo tanto la parte demandante deberá acreditarlo conforme al deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.

**AL “16”:** A mi representada no le consta que la señora Dian González haya estado incapacitada por un término de 6 meses. Por lo anterior, la parte demandante deberá probar lo afirmado conforme la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.

**AL “17”:** A mi representada no le consta que la señora Diana González padezca las secuelas médico legales permanentes consistentes en: *“Perturbación funcional de órgano sistema musculo esquelético del esqueleto axial de carácter permanente”*, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 4 de octubre de 2022.

**AL “18”:** A mi representada no le consta que la demandante se encuentre en proceso de calificación de invalidez, en adición a ello, resulta injustificado el cálculo de PCL que la parte demandante realiza de sus propias lesiones, pues no cuenta con sustento científico alguno que permita concluir dicha pérdida de capacidad laboral, consecuentemente, la mención de la PCL equivalente a un 19% resulta ser una mera especulación sin fundamento realizada por la parte actora.

**AL “19”:** Es cierto, así puede verificarse en el certificado de tradición emitido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Guacari.

**AL “20”:** No es cierto, conforme a la consulta del RUNT anexa a la demanda, el mencionado vehículo no se encuentra afiliado a la empresa de transportes Expreso Brasilia S.A., sino a la empresa Transportes Especiales Brasilia S.A.

**AL “21”:** de la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias apreciaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

- Es cierto que para el día 4 de octubre de 2022, la parte demandada contaba con un seguro de responsabilidad civil contractual y un seguro de responsabilidad civil extracontractual instrumentalizados mediante las pólizas No. C 2000257912 y C 2000257911 respectivamente, no obstante, ello no implica que las mismas sean susceptibles de afectarse en el proceso debido a que: i) no se encuentra probada la existencia de responsabilidad civil contractual impidiendo que se acredite la ocurrencia del riesgo asegurado mediante la póliza No. C 2000257912, y; ii) el caso que ocupa la atención del juzgado pretende la declaratoria de responsabilidad civil a partir del incumplimiento de un supuesto contrato de transporte, motivo por el cual la póliza No. C 2000 257911 no tiene cobertura material al amparar la responsabilidad civil extracontractual.
- No es cierto que las mencionadas pólizas no cuenten con límites, sublímites y exclusiones pues, como se verá más adelante, la carátula de cada una de las mencionadas pólizas refiere el valor asegurado, y sus condiciones generales estipulan de forma expresa las exclusiones de cada una de ellas.

**AL “22”:** No es cierto que se pueda imputar a los demandados impericia e imprudencia que hayan frustrado a los demandantes la posibilidad de seguir disfrutando y viviendo de las actividades que realizaban como familia, y que les impidan compartir y disfrutar de momentos placenteros del diario vivir.

**AL “23”:** No es cierto que los demandados hayan actuado con impericia e imprudencia que dieran origen a que los demandados sufrieran llanto, dolor, tristeza, congoja, depresión y mucho sufrimiento.

**AL “24”:** Este hecho repite la misma afirmación contenida en el hecho 22, por lo cual me permito señalar que reitero el pronunciamiento realizado frente a las afirmaciones ahí contenidas.

**AL “25”:** No es cierto que los demandados hayan actuado con impericia e imprudencia causando la imposibilidad de que la señora Diana González labore de nuevo, ya que: i) no se encuentra acreditado tal actuar en el expediente, y; ii) no existe prueba que dé cuenta de la existencia de limitaciones causadas por el supuesto accidente de tránsito que impidan a la demandante laborar.

**AL “26”:** A mi representada no le consta que la señora Diana González sufra las afectaciones referidas en este hecho. Por lo anterior, la parte demandante deberá probar lo afirmado conforme la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.

**AL “27”:** A mi representada no le consta que la señora Diana González haya sufrido alteraciones en sus relaciones sociales a partir del supuesto accidente. Por lo anterior, la parte demandante deberá probar lo afirmado conforme la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.

**AL “28”:** No es cierto que la parte demandada haya actuado con impericia e imprudencia generando las afectaciones a la salud de la señora Diana González, pues no obra prueba en el expediente que dé cuenta de dicho actuar.

**AL “29”:** No es cierto, la solicitud aquí relacionada no corresponde a una reclamación formal ya que la misma no acreditó la existencia del siniestro y de la cuantía, incumpliendo con los requisitos contenidos en el artículo 1077 del C.Co.

**AL “30”:** A mi representada no le consta si los demás demandados vinculados al proceso han indemnizado a la parte demandante por los supuestos hechos ocurridos, sin embargo, es cierto que mi mandante no ha pagado indemnización alguna pues no se encuentran acreditados los presupuestos establecidos en el artículo 1077 del C.Co. que permitan concluir el surgimiento de la obligación condicional a cargo de la compañía aseguradora.

### III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

#### FRENTE A LAS PRETENSIONES PRINCIPALES

**Frente a la pretensión “5.1”:** **ME OPONGO** a que se declare de forma solidaria la responsabilidad civil contractual de los aquí demandados, toda vez que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, no se encuentra acreditada la responsabilidad civil que afirma la parte demandante existe en el presente caso. Es necesario que el Honorable Despacho tenga en consideración que no obra elemento documental con el valor probatorio determinante y necesario para acreditar la ocurrencia del hecho, el daño y el nexo de causalidad respecto del accidente del 4 de octubre del 2022. Esto es así por cuanto el IPAT aportado al proceso fue diligenciado por el agente de tránsito de forma posterior a la ocurrencia de los hechos y, en todo caso, dicho documento se limita a consignar una mera hipótesis que no cuenta con respaldo probatorio adicional. Por tanto, es jurídicamente improcedente endilgar cualquier tipo de responsabilidad a cargo del extremo pasivo.

Ahora bien, tampoco es procedente la declaratoria de responsabilidad civil de forma solidaria en cabeza de la compañía aseguradora ya que no tuvo intervención de ninguna clase en el supuesto accidente de tránsito del día 4 de octubre de 2022, sino que su vinculación al proceso obedece de forma exclusiva a la celebración de un contrato de seguro. Además, como la vinculación de mi prohijada a este proceso se limita a la existencia de las pólizas de seguro de RCE y RCC, es claro que mi mandante no podrá asumir ninguna obligación indemnizatoria, por cuanto dichas pólizas no cubren los perjuicios aquí reclamados toda vez que no se ha configurado el riesgo asegurado de responsabilidad civil contractual descrito en las condiciones generales de dicha póliza.

**Frente a la pretensión “5.2”:** **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria, toda vez que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, no se encuentra acreditada la responsabilidad civil contractual por lo tanto no nace la obligación condicional de mi representada, y dicha pretensión condenatoria es consecuencia de la pretensión declaratoria precedente.

**Frente a la pretensión “5.3”:** **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria general toda vez que la responsabilidad civil contractual no se encuentra acreditada siendo improcedente exigir el pago de unos supuestos perjuicios que no fueron causados por la parte pasiva de la litis.

**Frente a la pretensión “5.4.1”:** **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por concepto de **lucro cesante**, toda vez que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, no se encuentra acreditada la responsabilidad civil contractual que afirma la parte demandante que existe en el presente caso, e igualmente se verifica que no aportan los demandantes prueba idónea al respecto incumpliendo con la carga probatoria que les corresponde, dejando en tela de juicio que la señora Diana González hubiere percibido de forma constante un ingreso el cual se haya visto disminuido en razón del accidente de tránsito, así como la supuesta PCL sufrida con motivo del accidente de tránsito. Por lo anterior es improcedente que el juzgado reconozca el mentado perjuicio y peor aún en la forma que lo solicitan los accionantes pues ello implicaría reconocer un perjuicio no acreditado.

**Frente a las pretensiones “5.5”:** **ME OPONGO** a la presente pretensión condenatoria por **daño moral** pues, al margen de no encontrarse probada la responsabilidad civil y la existencia de los mencionados perjuicios, el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, ya que únicamente se limita a solicitar un monto a favor de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo

allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

**Frente a la pretensión “5.6.”: ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **daño a la vida de relación**, toda vez que no se encuentra acreditada la responsabilidad en cabeza del asegurado y, según la jurisprudencia, se concede únicamente a la víctima directa en caso de lesiones personales, por lo que es improcedente acceder a las pretensiones del extremo actor en la forma solicitada, puesto que solicita la indemnización de este perjuicio frente a personas que no fueron víctimas directas del accidente de tránsito. Adicionalmente, la parte actora no ha acreditado las supuestas afectaciones derivadas del accidente pues no consta en el plenario el dictamen de invalidez pertinente, siendo meramente especulativo que la señora Diana González haya sufrido pérdida de capacidad laboral que de alguna forma limitare las distintas actividades que realiza diariamente. Además, si este perjuicio fuera reconocido, se solicitó por sumas que exceden los baremos jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia.

**Frente a la pretensión “5.7.”: ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **concepto de daño a la salud**, toda vez que no es jurídicamente viable imponer condena alguna tendiente al pago por concepto de esta tipología de perjuicio, toda vez que el mismo en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil no constituye un daño resarcible. En adición a lo mencionado, este perjuicio busca la reparación de los mismos daños causados a la supuesta víctima los cuales serían resarcidos a través del reconocimiento del daño a la vida de relación en el evento de una hipotética sentencia condenatoria que acredite los supuestos de este perjuicio, por lo tanto, si se llegare a reconocer este tipo de perjuicio extrapatrimonial, se estaría generando en la práctica un enriquecimiento sin justa causa para la parte actora al recibir doble compensación por un mismo daño.

**Frente a la pretensión “5.8.”: ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **concepto de pérdida de oportunidad**, toda vez que la parte demandante no acredita la expectativa cierta con la que contaba de forma previa al accidente y la cual fuere truncada a razón de este.

**Frente a la pretensión “5.9.1.”: ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **concepto de intereses de mora en contra de la aseguradora**, ya que a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir los presuntos daños producto del accidente del 4 de octubre de 2022 y tampoco la cuantía de la pérdida reclamada, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el demandante efectuó la notificación del auto admisorio de la demanda, desde la solicitud extrajudicial para obtener una indemnización, o desde que presentó la misma.

**Frente a la pretensión “5.9.1.”: ME OPONGO** debido a que no se acredita la existencia de responsabilidad civil contractual en contra de los demandados, motivo por el cual no existe obligación de indemnización y, consecuentemente, no existe obligación pendiente que genere intereses moratorios.

**Frente a la pretensión “5.10”:** ME PONGO ya que es una pretensión consecuencial de las anteriores.

**Frente a la pretensión “5.11”:** ME PONGO ya que la indexación no procede frente al eventual reconocimiento de los perjuicios extrapatrimoniales pues los mismos no obedecen a una suma determinada susceptible de perder su valor adquisitivo con el paso del tiempo. En este mismo sentido, no es procedente solicitar la indexación de las coberturas de las pólizas debido a que la legislación comercial es clara que la responsabilidad de la aseguradora se limita al pago de la respectiva suma al momento de ocurrencia del siniestro, por lo tanto en caso de una eventual condena no podrá indexarse el límite asegurado.

#### **FRENTE A LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS**

**Frente a la pretensión “6.1”:** ME OPONGO a que se declare de forma solidaria la responsabilidad civil extracontractual de los aquí demandados, toda vez que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, no se encuentra acreditada la responsabilidad civil que afirma la parte demandante existe en el presente caso. Es necesario que el Honorable Despacho tenga en consideración que no obra elemento documental con el valor probatorio determinante y necesario para acreditar la ocurrencia del hecho, el daño y el nexo de causalidad respecto del accidente del 4 de octubre del 2022. Esto es así por cuanto el IPAT aportado al proceso fue diligenciado por el agente de tránsito de forma posterior a la ocurrencia de los hechos y, en todo caso, dicho documento se limita a consignar una mera hipótesis que no cuenta con respaldo probatorio adicional. Por tanto, es jurídicamente improcedente endilgar cualquier tipo de responsabilidad a cargo del extremo pasivo.

Ahora bien, tampoco es procedente la declaratoria de responsabilidad civil de forma solidaria en cabeza de la compañía aseguradora ya que no tuvo intervención de ninguna clase en el supuesto accidente de tránsito del día 4 de octubre de 2022, sino que su vinculación al proceso obedece de forma exclusiva a la celebración de un contrato de seguro. Además, como la vinculación de mi prohijada a este proceso se limita a la existencia de las pólizas de seguro de RCE y RCC, es claro que mi mandante no podrá asumir ninguna obligación indemnizatoria, por cuanto dichas pólizas no cubren los perjuicios aquí reclamados toda vez que no se ha configurado el riesgo asegurado de responsabilidad civil contractual descrito en las condiciones generales de dicha póliza.

**Frente a la pretensión “6.2”:** ME OPONGO a esta pretensión condenatoria, toda vez que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, no se encuentra acreditada la responsabilidad civil contractual por lo tanto no nace la obligación condicional de mi representada, y dicha pretensión condenatoria es consecuencia de la pretensión declaratoria precedente.

**Frente a la pretensión “6.3.”:** ME OPONGO a esta pretensión condenatoria general toda vez que la responsabilidad civil contractual no se encuentra acreditada siendo improcedente exigir el pago de unos supuestos perjuicios que no fueron causados por la parte pasiva de la litis.

**Frente a la pretensión “6.4.1.”:** ME OPONGO a esta pretensión condenatoria por concepto de **lucro cesante**, toda vez que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, no se encuentra acreditada la responsabilidad civil contractual que afirma la parte demandante que existe en el presente caso, e igualmente se verifica que no aportan los demandantes prueba idónea al respecto incumpliendo con la carga probatoria que les corresponde, dejando en tela de juicio que la señora Diana González hubiere percibido de forma constante un ingreso el cual se haya visto disminuido en razón del accidente de tránsito,

así como la supuesta PCL sufrida con motivo del accidente de tránsito. Por lo anterior es improcedente que el juzgado reconozca el mentado perjuicio y peor aún en la forma que lo solicitan los accionantes pues ello implicaría reconocer un perjuicio no acreditado.

**Frente a las pretensiones “6.5.”:** **ME OPONGO** a la presente pretensión condenatoria por **daño moral** pues, al margen de no encontrarse probada la responsabilidad civil y la existencia de los mencionados perjuicios, el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, ya que únicamente se limita a solicitar un monto a favor de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

**Frente a la pretensión “6.6.”:** **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **daño a la vida de relación**, toda vez que no se encuentra acreditada la responsabilidad en cabeza del asegurado y, según la jurisprudencia, se concede únicamente a la víctima directa en caso de lesiones personales, por lo que es improcedente acceder a las pretensiones del extremo actor en la forma solicitada, puesto que solicita la indemnización de este perjuicio frente a personas que no fueron víctimas directas del accidente de tránsito. Adicionalmente, la parte actora no ha acreditado las supuestas afectaciones derivadas del accidente pues no consta en el plenario el dictamen de invalidez pertinente, siendo meramente especulativo que la señora Diana González haya sufrido pérdida de capacidad laboral que de alguna forma limitare las distintas actividades que realiza diariamente. Además, si este perjuicio fuera reconocido, se solicitó por sumas que exceden los baremos jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia.

**Frente a la pretensión “6.7.”:** **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **concepto de daño a la salud**, toda vez que no es jurídicamente viable imponer condena alguna tendiente al pago por concepto de esta tipología de perjuicio, toda vez que el mismo en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil no constituye un daño resarcible. En adición a lo mencionado, este perjuicio busca la reparación de los mismos daños causados a la supuesta víctima los cuales serían resarcidos a través del reconocimiento del daño a la vida de relación en el evento de una hipotética sentencia condenatoria que acredite los supuestos de este perjuicio, por lo tanto, si se llegare a reconocer este tipo de perjuicio extrapatrimonial, se estaría generando en la práctica un enriquecimiento sin justa causa para la parte actora al recibir doble compensación por un mismo daño.

**Frente a la pretensión “6.8.”:** **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **concepto de pérdida de oportunidad**, toda vez que la parte demandante no acredita la expectativa cierta con la que contaba de forma previa al accidente y la cual fuere truncada a razón de este.

**Frente a la pretensión “6.9.1.”:** **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria por **concepto de intereses de mora en contra de la aseguradora**, ya que a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir los presuntos daños producto del accidente del 4 de octubre de 2022 y tampoco la cuantía de la pérdida reclamada, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el

demandante efectuó la notificación del auto admisorio de la demanda, desde la solicitud extrajudicial para obtener una indemnización, o desde que presentó la misma.

**Frente a la pretensión “6.9.2.”: ME OPONGO** debido a que no se acredita la existencia de responsabilidad civil contractual en contra de los demandados, motivo por el cual no existe obligación de indemnización y, consecuentemente, no existe obligación pendiente que genere intereses moratorios.

**Frente a la pretensión “6.10”:** ME PONGO ya que es una pretensión consecencial de las anteriores.

#### IV. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

El juramento estimatorio se objeta teniendo en cuenta que los valores referidos en el mismo deben ser estimados de forma razonada, sin embargo, en el acápite mencionado la parte demandante se limita a referir sumas de dinero sin indicar de dónde se extraen las mismas y sin que obre pruebas de dónde obtiene el monto base de la liquidación por concepto de lucro cesante señalado en el juramento estimatorio.

Debe recordarse que incluso desde los mismos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia<sup>1</sup> el perjuicio de lucro cesante solo puede ser reconocido en tanto el mismo se encuentre debidamente probado, sin entrar a especular sobre lo percibido. No obstante, en el caso concreto, no existe prueba alguna de los ingresos percibidos por la víctima al momento del accidente, de dónde provienen dichos ingresos, ni certeza sobre la PCL, careciendo de sustento las afirmaciones realizadas en el escrito de la demanda.

En efecto, se verifica que el juramento estimatorio toma como base un ingreso mensual de \$1.160.000, sin embargo, no existe prueba alguna en el expediente que permita corroborar el ingreso mensual señalado, limitando su “existencia” a las simples afirmaciones realizadas en el escrito petitorio por la parte actora, siendo improcedente su reconocimiento e incluso su liquidación sobre esta base salarial, junto con el 25% correspondiente a las prestaciones sociales teniendo en cuenta la incertidumbre de la existencia de una relación laboral o de índole similar que justifique que la víctima perciba pago alguno por este concepto. Por lo tanto, no encuentra justificación alguna el hecho de que la parte demandante adicione al supuesto salario devengado el valor del 25% correspondiente a prestaciones sociales para derivar de ahí el supuesto perjuicio reclamado.

Complementando lo anterior, es posible evidenciar con la consulta realizada en el ADRES que la señora Diana González no se encuentra actualmente afiliada al sistema de seguridad social en salud y cuando se encontraba vinculada, dicha afiliación se hizo frente al régimen subsidiado, veamos:

---

<sup>1</sup> sentencias SC16690 de 2016 y SC11575-2015 del 05 de mayo de 2015

**Resultados de la consulta**

**Información Básica del Afiliado :**

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	38600845
NOMBRES	DIANA PATRICIA
APELLIDOS	GONZALEZ PRECIADO
FECHA DE NACIMIENTO	*/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

**Datos de afiliación :**

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
RETIRADO	CALISALUD E.P.S	SUBSIDIADO	01/10/2008	14/02/2010	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión: 05/26/2024 22:14:26 Estación de origen: 2801:12:c800:2070::1

Luego, llama la atención que la parte demandante realice el juramento estimatorio con base en la reclamación del perjuicio patrimonial de lucro cesante cuando, conforme a la ley nacional, las personas afiliadas al régimen subsidiado de salud son aquellas que no cuentan con capacidad económica, lo que es incluso más evidente, la señora Diana González no contaba con afiliación alguna al momento del accidente, situación que solo corrobora la falta de ingresos y capacidad económica de la demandante.

Por otra parte, el lucro cesante solicitado en la demanda se liquida con base en una supuesta PCL equivalente al 19%, sin embargo, no obra en el plenario el dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez que acredite dicha limitación que, consecuentemente, repercuta en los ingresos obtenidos por la parte actora, por lo que su cálculo se basa en meras especulaciones contrariando los parámetros señalados en la jurisprudencia. La carencia de la estimación razonada de la cuantía es tan evidente en este punto que incluso en los hechos de la demanda, la parte actora afirma no contar con el dictamen de PCL, limitándose a estimar el porcentaje del 19% sin hacer relación a la prueba que le sirve de sustento para ello.

Por lo anterior los montos referidos en este acápite no podrán tenerse como prueba del lucro cesante supuestamente causado.

**V. EXCEPCIONES DE MÉRITO**

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

## EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

### **1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ATRIBUIBLE A LOS DEMANDADOS YA QUE LA PARTE DEMANDANTE NO HA DEMOSTRADO LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MISMA**

La parte demandante solicita como pretensión principal la declaratoria de la responsabilidad civil contractual atribuible a los demandados por las lesiones ocasionadas a la señora Diana Patricia González por la supuesta imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas ETK-163, y de forma subsidiaria, solicita declarar la responsabilidad civil extracontractual con fundamento en la supuesta imprudencia e impericia antes señaladas. En primer lugar, debe manifestarse que la responsabilidad civil extracontractual encuentra sustento en los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, concretamente, el artículo referido establece que “(...) *El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido (...)*”. Ahora bien, este tipo de responsabilidad solo puede ser analizada cuando se busque demostrar un delito o culpa que genere daño a otro, es decir, una conducta que cause un daño sin que la misma tenga su origen en el incumplimiento de una obligación de carácter contractual. Este supuesto no se encuentra presente en el caso concreto ya que la parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de un hecho supuestamente ocurrido en el desarrollo de un contrato de transporte, por lo tanto, no es posible analizar la configuración de la responsabilidad civil extracontractual de la parte pasiva. Por otra parte, se manifiesta que la supuesta existencia de la responsabilidad civil contractual, no se encuentra acreditada, ya que no se han demostrado los elementos que estructuran una responsabilidad contractual, esto es: i) la existencia del contrato de transporte terrestre, ii) el incumplimiento imputable al transportador, iii) el daño y iv) la relación de causalidad entre dicho daño y la culpa contractual, de tal suerte, no es procedente el reconocimiento de ningún tipo de indemnización y/o reconocimiento de perjuicios en favor de los demandantes.

### **De la improcedencia de analizar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual**

Como se mencionó anteriormente, el artículo 2341 del Código Civil es la norma encargada de regular de forma especial la responsabilidad civil extracontractual en nuestro ordenamiento jurídico, para que la misma surja, la norma en mención señala: “*El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido (...)*”, dejando claro que aquel quien comete el hecho generador del daño es el obligado a resarcirlo a quien lo sufre. Ahora bien, esta regulación difiere de la relacionada con la responsabilidad civil contractual y, concretamente, de la responsabilidad surgida del incumplimiento del contrato de transporte, negocio jurídico regulado en los artículos 981 y siguientes del Código de Comercio.

Conforme a lo anterior, es claro que la normativa del estatuto civil busca determinar la responsabilidad por un hecho que no se ha generado en el marco de un contrato, a diferencia de lo dispuesto en el estatuto comercial, que precisamente regula una relación contractual concreta y determina las consecuencias propias de su incumplimiento.

En línea de lo expuesto, resulta evidente que en el caso concreto no resulta posible estudiar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual de la parte pasiva de la acción como quiera que los demandantes sustentan sus pretensiones en la supuesta existencia de un contrato de transporte celebrado entre la señora

Diana Patricia González y la empresa transportadora del vehículo de placas ETK-163, situación que puede deducirse de los hechos narrados en los cuales se manifiesta que el accidente generador de las presuntas lesiones, tuvo lugar cuando se transportaba como pasajera del señalado vehículo, luego, tales presupuestos fácticos limitan el análisis a la eventual existencia de la responsabilidad civil contractual.

### **Inexistencia de la responsabilidad civil contractual en cabeza de los demandados**

En relación a la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, está llamado el demandante a acreditar los siguientes *supuestos* “i) que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquél que, señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le imputa (existencia de un contrato); ii) que esta última consista en la inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de la ley o por disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo (incumplimiento culposos), iii) y en fin, que el daño cuya reparación económica se exige consista, básicamente, en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho (daño) de no mediar la relación tantas veces mencionada (relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño)” (CSJ SC 380-2018 del 22 de feb. de 2018, Rad. 2005-00368-01).

En este orden de ideas, al concurrir el apoderado de la parte demandante bajo el presupuesto de responsabilidad civil contractual está en la obligación de soportar sus pretensiones en los supuestos fácticos que evidencien la satisfacción de los mentados presupuestos alegando las pruebas que respalden sus afirmaciones, hechos estos que no se evidencian al interior del caso que nos convoca pues no se ha demostrado con suficiencia la existencia de los mismos.

Al respecto, lo primero que se indica es que no se encuentra acreditado dentro del plenario que la señora Diana Patricia González se desplazara como pasajera del vehículo de placa ETK 163. En efecto, la parte demandante no aporta ninguna prueba que dé cuenta de la celebración de un contrato de transporte con la empresa Especiales Brasilia S.A., por lo cual no se cumple el primero de los elementos requeridos por la jurisprudencia nacional con el fin de obtener el resarcimiento perseguido pues, como ya se había explicado en líneas anteriores, la responsabilidad civil contractual solo puede existir en tanto se pruebe que la acción u omisión generadora del perjuicio se desarrolló en el marco de un contrato, de un acuerdo de voluntades entre las partes que conforman el extremo activo y pasivo de la litis, supuesto que brilla por su ausencia en el presente caso.

Ahora bien, dado que la parte demandante no logró acreditar la existencia del vínculo contractual con la empresa de transporte, es lógico que tampoco puede demostrar el cumplimiento defectuoso, tardío o el incumplimiento de la obligación a la que la empresa transportadora se haya sometido por el simple hecho que no existe prueba alguna del vínculo contractual referido en la demanda.

No obstante lo anterior, la parte accionante aporta al proceso un informe policial de accidente de tránsito mediante el cual busca establecer la ocurrencia de el hecho generador del daño y la imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas ETK-163, motivo por el cual se hace necesario profundizar en el valor probatorio de dicho informe sin que por ello se esté admitiendo la existencia del contrato, su incumplimiento, la imprudencia e impericia del conductor, y la generación de las supuestas lesiones sufridas por la víctima.

Es menester recordar inicialmente que el artículo 167 del Código General del Proceso impone la carga demostrativa del supuesto de hecho que contemplan las normas en las cuales la parte interesada finca su reclamación. Siendo así, es la parte demandante quien en este caso debe demostrar la existencia de los supuestos de la responsabilidad civil contractual con el fin de obtener un resarcimiento, no obstante, los accionantes fincan sus reclamos en afirmaciones sin respaldo probatorio, ya que se basan en la mera hipótesis consignada en el IPAT.

Es necesario recordar en este punto que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

*“(...) Con arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones, sería desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad así y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga, quien afirma en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez. Esa carga, que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más quedar convencido el Juez (...)” (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 12 de febrero de 1980)*

Igualmente, es importante reseñar que el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

*“(...) Artículo 149: El informe contendrá por lo menos: Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.*

*Clase de vehículo, número de la placa y demás características.*

*Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.*

*Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.*

*Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.*

*Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.*

*Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.*

*Descripción de los daños y lesiones.*

*Relación de los medios de prueba aportados por las partes.*

*Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.*

*[...] Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes (...)*"

Por su parte el artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

*"(...) ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa (...)"*

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad.

Debe indicarse que tratándose de la valoración de las pruebas, específicamente con el valor brindado al Informe Policial de Accidente de Tránsito, debe considerarse que de conformidad con la Resolución 001268 de 2000 expedida por el Ministerio de Transporte, el objetivo de diligenciar los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito es identificar las hipótesis de causas de accidentalidad que permitan elaborar diagnósticos para la planificación de correctivos en materia vial con la finalidad de reducir el número de accidentes y/o disminuir su gravedad. Supuesto que dista considerable de establecer la responsabilidad de los vehículos implicados en los accidentes de tránsito. Circunstancia que está en consonancia con lo establecido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia según la cual, el valor probatorio del bosquejo topográfico o del Informe de Policial de Accidentes de Tránsito debe ser apreciado de conformidad con el sistema de apreciación racional, mediante el cual el juez no se encuentra atado por reglas preestablecidas que establezcan el mérito atribuible a los diversos medios de prueba. Por el contrario, *"lo dota de libertad para apreciarlos y definir su poder de convicción, con un criterio sistemático, razonado y lógico"*<sup>2</sup>.

Es decir, el Informe Policial de Accidente de Tránsito no funge como prueba idónea y suficiente para acreditar la impericia, la imprudencia y la existencia del accidente en este caso, por tratarse de un documento en el cual se diligencia una mera hipótesis no comprobada. De manera que, al no existir prueba idónea de la ocurrencia del accidente y de la impericia e imprudencia del conductor, es jurídicamente improcedente endilgar cualquier tipo de responsabilidad, debiendo en este punto exonerar totalmente a los Demandados.

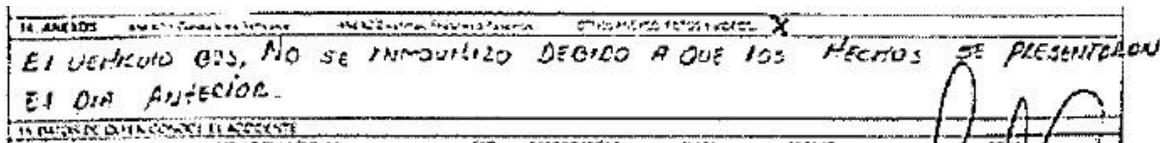
---

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC7978-2015. Radicado 2008-00150

Conforme a lo anterior, es insuficiente dar credibilidad a la hipótesis de la ocurrencia del accidente sin respaldar la misma en otros medios de prueba, ya que su contenido no es apto o suficiente para endilgar responsabilidad, adoptar la posición contraria dando credibilidad exclusivamente a lo consignado en el mencionado informe policial equivaldría crear un tipo de “tarifa legal” cuando la ley no lo exige.

Ahora bien, no solo existen motivos de naturaleza jurídica que dan cuenta de la insuficiencia del IPAT como una prueba capaz de acreditar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de conductor del vehículo, sino que, además, en el caso concreto, el informe aportado por la parte demandante contiene información que solo corrobora la imposibilidad de determinar la ocurrencia del accidente conforme a las circunstancias descritas en la demanda.

Así, en primer lugar, vale la pena resaltar que este documento no solo fue diligenciado por una agente de tránsito que no se encontraba presente al momento de los hechos, sino que fue diligenciado al haber transcurrido un día de los supuestos sucesos, conforme se verifica en la siguiente anotación



Por lo tanto, si su juzgado decidiera darle alcance probatorio al mencionado documento pese a las limitaciones legales existentes para que el mismo pueda ser considerado una prueba pertinente de los hechos referidos en la demanda, no podrá pasarse por alto que este fue diligenciado un día después de la ocurrencia del supuesto accidente, por lo que resulta evidente que el agente de tránsito que consignó la información ahí plasmada no pudo llegar a la escena de los hechos a verificar lo ocurrido generando serias dudas sobre el contenido del IPAT.

Continuando con el análisis del señalado informe, resulta pertinente indicar que, aún si se considerara una prueba pertinente, el mismo indica que la ocurrencia del accidente de tránsito no habría tenido origen en una conducta imputable al conductor del vehículo de placas ETK-163, situación que impediría acreditar el nexo causal entre el supuesto daño y el hecho generador del mismo.

En línea de lo mencionado, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 992 del C.Co. sobre la exoneración de responsabilidad del transportador. Concretamente la norma referida establece:

*“ARTÍCULO 992. EXONERACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR. El transportador sólo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño lo fue extraña o que, en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación. Las violaciones a los reglamentos oficiales o de la empresa, se tendrán como culpa, cuando el incumplimiento haya causado o agravado el riesgo. Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos.”* (subrayado fuera del texto original).

Por lo tanto, de darse valor probatorio al IPAT, debe en igual medida declararse la existencia de una causa extraña, pues, verificando el contenido del informe y del croquis, se resalta que el reductor de velocidad ubicado en la vía donde tuvo lugar el supuesto accidente, no habría contado con señalización ni pintura que advirtiera al conductor de la existencia del mismo, siendo sorpresivo el paso sobre este impidiendo que se adelantara cualquier maniobra pertinente con suficiente antelación para preservar la integridad de cualquier pasajero del vehículo. Concretamente, la situación descrita se encuentra reflejada en los siguientes acápites del IPAT:

EL IMPORTE DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DELEGACIÓN: 308

ACTA: 12 TIENGO: **AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD**



Como se verifica, la hipótesis planteada en el IPAT y el croquis elaborado por el agente de tránsito, dan cuenta que el supuesto accidente habría ocurrido por falta de señalización en el lugar de los hechos, concretamente frente al reductor de velocidad ubicado en la vía, por lo cual, de considerarse acreditada la ocurrencia de los hechos y la existencia del daño, o es posible endilgar responsabilidad civil de carácter contractual en cabeza del demandado, ya que el accidente ocurrió por una causa extraña la cual sale del control del conductor del vehículo afiliado a la empresa de transporte.

Debido a que la parte demandante no pudo acreditar ninguno de los elementos referidos anteriormente, es evidente que tampoco puede acreditar la existencia del supuesto daño sufrido, pues la existencia de la historia clínica de la señora Diana Patricia González en el expediente, no es suficiente para acreditar que la demandante haya sufrido un daño proveniente del supuesto accidente de tránsito ocurrido mientras se encontraba dentro del vehículo asegurado en calidad de pasajera.

Corolario de lo mencionado en esta excepción es que la parte demandante no pudo acreditar ninguno de los elementos señalados en la Ley y la jurisprudencia al no haber aportado las pruebas pertinentes que permitieran establecer la existencia de un accidente de tránsito con ocasión de la imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas ETK-163, el cual haya generado de forma consecuente determinadas lesiones a la demandante, ello por cuanto el IPAT no es la prueba idónea que permita acreditar los supuestos de la responsabilidad civil y, aún si se tuviera como prueba de lo ocurrido, no podrá dejarse de lado que en todo caso dicho documento registra la falta de señalización en el lugar de los hechos permitiendo verificar la existencia de una causa extraña, la cual eximiría de responsabilidad a la parte pasiva de la litis.

Por lo anterior solicito declarar probada esta excepción.

## 2. CONFIGURACIÓN DE UNA CAUSA EXTRAÑA Y CONSECUENTE INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL

La presente excepción se propone sin que ello implique el reconocimiento de la existencia del accidente de tránsito y del contrato de transporte que, como se dijo anteriormente, no han sido acreditados por la parte demandante. No obstante lo anterior, resulta necesario señalar que el IPAT aportado con la demanda describe como causa probable del accidente la falta de señalización en la vía dando lugar a la configuración de una causa extraña conforme a lo dispuesto en el artículo 992 del C. Co., situación que desvirtúa la supuesta existencia del elemento nexo causal eximiendo de cualquier responsabilidad a la parte pasiva de la litis pese a que el Despacho hallare configurados los demás elementos de la misma.

Conforme a lo señalado en el artículo 992 del C.Co. *“El transportador sólo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño lo fue extraña o que, en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación (..).”* (subrayado fuera del texto original).

En este sentido, la causa extraña puede presentarse de tres formas diferentes: i) mediante la fuerza mayor o caso fortuito; ii) por la culpa exclusiva de la víctima, y; iii) por el hecho de un tercero. Para el caso en concreto es totalmente claro que, de acreditarse la ocurrencia del accidente, la misma tuvo lugar debido a presentarse fuerza mayor o caso fortuito como a continuación pasa a explicarse.

Es importante señalar que la fuerza mayor y el caso fortuito consisten en el acontecimiento externo al círculo de actuación del agente, que reúne las notas de imprevisibilidad, por lo cual en este tipo de evento el hombre no puede hacer nada para evitarlos. En consecuencia, para eximir de responsabilidad al presunto causante de un accidente de tránsito es necesario que el accidente haya sido inevitable e imprevisible para la persona que lo produce. Si el accidente fue inevitable pero previsible significa cierta asunción de riesgos y ello implica culpabilidad. Para el caso en concreto, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que:

*La Corte Suprema de Justicia, ha precisado que, a la víctima de una lesión causada con ocasión de la conducción de vehículos, le basta con acreditar el ejercicio de dicha actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre aquella y este. En contraste, el presunto responsable no puede exonerarse probando la diligencia o cuidado, o la ausencia de culpa, y salvo que exista una norma que indique lo contrario, solo podrá hacerlo demostrando plenamente que el daño no se produjo dentro del ejercicio de la actividad, sino que obedeció a un elemento extraño exclusivo, esto es, la fuerza mayor, el caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero, que excluyo la autoría por romper el nexo causal.<sup>3</sup>*

La responsabilidad por riesgo del conductor del vehículo construye tres causas que exoneran de responsabilidad, a saber, el hecho exclusivo y determinando de un tercero o de la víctima, el caso fortuito o fuerza mayor, aunque la fuerza mayor exonera de responsabilidad en el caso de daños corporales siempre y

<sup>3</sup> Corte Constitucional, Sentencia T – 609 de 2014. MP. Jorge Ivan Palacio Palacio.

cuando esa fuerza mayor sea ajena a la circulación del vehículo. Para el caso en concreto tenemos la configuración de un caso fortuito como causal eximente de responsabilidad al hallarse plenamente acreditados los elementos propios de tal circunstancia, a saber, un hecho externo, imprevisible e irresistible.

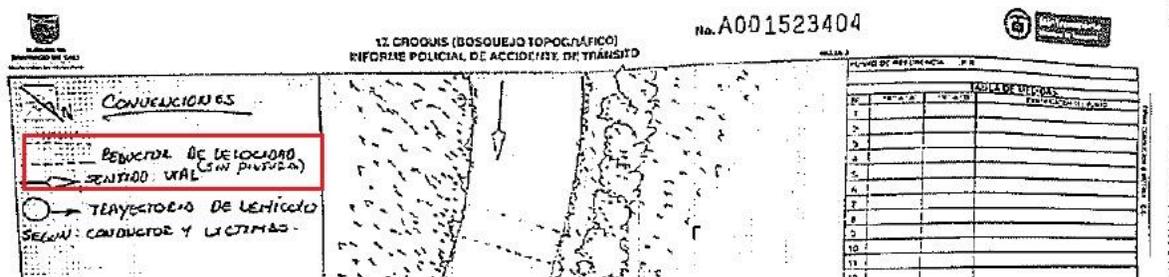
**Frente al hecho externo:** Respecto de esta característica, para el caso sub examine, encontramos que el accidente habría ocurrido debido a que el conductor del vehículo afiliado a la empresa de transporte no pudo evidenciar señalización suficiente en la vía que le permitiera conocer en un término y distancia razonable del reductor de velocidad ubicado en la vía, tal como lo establece el Informe Policial de Accidente de Tránsito así:

EL IMPUESTO DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

TELEFONO: 308

ACTA: 12 TELEFONOS

12 TELEFONOS: **FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD**



Conforme a lo anterior, el conductor del mencionado vehículo no tenía la posibilidad de prevenir la existencia del reductor de velocidad para proceder a disminuir, consecuentemente, la velocidad a la que conducía para evitar que el paso sobre el mismo hubiere generado un impacto mayor al esperado. Luego, es claro como la ocurrencia del accidente de tránsito es un evento es externo a la voluntad del conductor del rodante involucrado, pues la falta de señalización que impidió reducir la velocidad a tiempo es un hecho que sale de la órbita o accionar del conductor, ya que su control frente a esta situación se limita a actuar conforme a la señalización existente en la vía, la cual debe encontrarse en la misma de forma adecuada siendo este un deber de la autoridad pública competente.

**Frente al hecho imprevisible:** Este elemento implica que en condiciones normales haya sido totalmente imposible para el agente precaverse contra el hecho, siendo claro que el paso del vehículo sobre el reductor de velocidad no pudo ser previsible en tanto la autoridad competente no dispuso la señalización adecuada para que el conductor tomara las medidas adecuadas que le permitieran reducir la velocidad de forma óptima para evitar que el efecto sobre el vehículo y el movimiento de los pasajeros fuera mayor al esperado.

**Frente al hecho irresistible:** Este alude a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. Aterrizándolo al caso en concreto, no hubo posibilidad de evitar el acontecimiento aludido por parte del conductor del vehículo por ser un hecho externo e imprevisible, en efecto, no era posible lograr que el vehículo disminuyera su velocidad o frenara con la suficiente antelación teniendo en cuenta que un vehículo de las dimensiones del aquí implicado no puede frenar de forma inmediata o reducir intempestivamente su velocidad, e incluso si ese fuera el caso, dicha medida podría resultar riesgosa para los pasajeros del mismo, lo que prácticamente deja sin posibilidades al conductor y vuelve totalmente inevitable pasar sobre el reductor ubicado en la vía a una velocidad incluso menor.

Así las cosas, es claro que, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, se indica como hipótesis la numero

308, correspondiente a "OTRAS" en relación con condiciones de la vía, concretamente a la falta de señalización y pintura para identificar la existencia del reductor de velocidad. Por lo anterior, se evidencia que la producción del daño alegado en el escrito de la demanda no es, en modo alguno, imputable al conductor del vehículo, sino que se debe al acaecimiento de una circunstancia imprevisible que escapó de la capacidad de manejo y control del señor Walter Vargas como lo es la inexistencia de la señalización en la vía la cual debe ser dispuesta por la autoridad pública competente, impidiendo que el conductor conociera de forma oportuna del reductor de velocidad; siendo así, se verifica la existencia de una causa extraña que impide la estructuración del nexo de causalidad siendo imposible endilgar una conducta de carácter culposa o dolosa que al conductor del vehículo de placa ETK-163.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito amablemente se declare probada esta excepción.

### **3. IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANERA SOLIDARIA EN CABEZA DE COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

COMPAÑÍA MUNDIAL SE DEGUROS no puede ser considerada como responsable de la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna, máxime en atención a que su relación con el vehículo de placa ETK-163 para el momento de ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad. Es decir ni el conductor del vehículo era dependiente de la aseguradora, ni aquella ostentaba la propiedad de dicho automotor, por ende no puede imponerse una obligación solidaria, pues lo cierto es que su relación se ciñe a los estrictos términos del contrato de seguro.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación, de igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el artículo 2344 del Código Civil si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, sin embargo, tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia<sup>4</sup> la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, no obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte<sup>5</sup> igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

<sup>4</sup> Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

<sup>5</sup> Ibídem.

*“La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario.*

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de las pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual y contractual básicas para vehículos de servicio público Nos C 2000257912 y C 2000257911 respectivamente, entre mi procurada y el tomador no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguradora por la misma desarrollada, lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante.

Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del supuesto accidente de tránsito presuntamente acaecido el 4 de octubre de 2022, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

#### **4. TASACIÓN EXCESIVA DEL DAÑO MORAL RECLAMADO**

Toda vez que los demandantes pretenden una cuantiosa indemnización con ocasión de unos supuestos perjuicios extrapatrimoniales, se propone la presente excepción, sin que ello implique aceptación alguna de responsabilidad de ninguna índole por parte de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS. Así, por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que el mismo no “constituye un «regalo u obsequio»,” por el contrario se encuentra encaminado a “reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares”<sup>6</sup>, con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa», sin perjuicio de los criterios

---

<sup>6</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004- 032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona)

orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia<sup>7</sup>.

En esa medida y sin que implique asunción de responsabilidad, es evidente la inexactitud del cálculo que hace el apoderado de la actora para establecer el monto de las pretensiones de esta demanda, pues de manera desproporcionada solicita el pago de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes, sin considerar que este monto supera el valor máximo de \$60.000.000 reconocido por la Corte Suprema de Justicia por concepto de perjuicios morales EN CASO DE MUERTE, pues incluso, en el remoto e hipotético evento de que se acceda a las pretensiones, en ningún caso alcanzarían a tener la entidad reclamada por la parte activa debido a que el perjuicio solicitado se fundamenta en las supuestas lesiones sufridas por la señora Diana González y, además, es improbable que se acredite la reunión de los elementos que conformarían una responsabilidad civil y por eso ruego a su señoría que frente a la abismal pretensión del accionante, la cual denota evidentemente un afán de lucro injustificado, imposible de satisfacer.

Cabe resaltar que los tipos de perjuicios extrapatrimoniales que solicita la parte actora sean reparados económicamente, resultan o tratan de una compleja tipología de perjuicios cuya configuración depende de la existencia de una serie de elementos subjetivos y de los que su tasación si bien se encuentra deferida “*al arbitrium judicis*”, es decir, al recto criterio del fallador, sí deben por lo menos, estar sujetos a su comprobación y acreditación mediante los medios de prueba conducentes para el efecto. En ese sentido, es fundamental que realmente se logre comprobar que, respecto a la indemnización por perjuicios por concepto de perjuicios morales, es necesario que, esos sentimientos que dice la víctima habersele generado, demuestren que efectivamente fueron producto del hecho dañoso configurativo de este proceso.

Así las cosas, es menester que quien aduce la generación de este tipo de perjuicios, demuestre plenamente la aflicción sufrida, tanto física como sentimental, para que, si quiera, se entre a considerar si tienen lugar o no lugar a obtención de un resarcimiento económico.

*“(…) Por cierto que las pautas de la jurisprudencia en torno a la tasación de perjuicios extrapatrimoniales, con fundamento el prudente arbitrio del juez, fueron acogidas expresamente por el artículo 25 del Código General del Proceso (…)*».

*Y aunque tal regla está prevista para la cuantía de los procesos, en general, **permite ver que el sistema procesal es reacio a aceptar pretensiones de indemnización inmaterial por montos exagerados, a voluntad de las partes**, ya que así se generan distorsiones en las instancias y recursos que razonablemente deben tener los trámites judiciales (…)*<sup>8</sup> (Énfasis propio)

Ha señalado igualmente la Corte<sup>9</sup> que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la siquis de cada persona “*es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital*”, de ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no

<sup>7</sup> Ídem

<sup>8</sup> Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000- 2017-00405-00.

<sup>9</sup> Ibidem.

resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, “*ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario*”.

De igual manera, no existe ninguna presunción que opere en favor de la parte demandante que permita emitir una condena por la sola enunciación de un aparente perjuicio. Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia<sup>10</sup> ha manifestado claramente:

*“(…) Señálese que, con el fin de evitar **antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas**, la determinación del daño en comentario debe atender a las «las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio» (SC5885, 6 may. 2016, rad. n.º 2004-00032-01), aspectos todos ausentes de prueba en la foliatura (…)”*

Pero además de lo anterior, resulta necesario destacar que la suma pretendida resulta abiertamente desproporcionada y contraria los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que la mentada Corporación ha reconocido una suma igual a sesenta millones de pesos (\$ 60.000.000)<sup>11</sup> por este perjuicio, como consecuencia del fallecimiento de un ser querido<sup>12</sup>, por lo que resulta evidentemente desproporcionado acceder a las sobrevaloradas pretensiones del extremo actor quien solicita el resarcimiento de supuestos perjuicios por un valor total de ciento dieciséis millones de pesos (\$116.000.000) al momento de presentación de la demanda, con fundamento en lesiones aparentemente provocadas por el accidente de tránsito de las cuales se desconoce su gravedad, ya que ni siquiera cuenta con una valoración de PCL.

En conclusión, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte Demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada. En tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto de daño moral que supere los montos fijados de acuerdo a las sentencias anteriormente mencionadas. En consecuencia, la suma solicitada por el Demandante resulta exorbitante y se encuentra por fuera de los lineamientos en mención, en consecuencia, corresponderá al arbitrio del juez determinar el valor del daño moral, teniendo en cuenta los elementos probatorios que reposan en el expediente, los cuales no corroboran lo peticionado por la parte demandante y en tal virtud la misma debe ser desestimada.

En consecuencia, solicito declarar probada esta excepción.

## **5. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO DENOMINADO DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN SOLICITADO EN LA DEMANDA**

<sup>10</sup> CSJ, SC-5340-2018.

<sup>11</sup> CSJ, SC-5340-2018.

<sup>12</sup> En el fallo referenciado se resolvió: “Declarar que los convocados Alejandro Quintero Osorio y Diana Patricia Restrepo Ochoa, son civil y solidariamente responsables de los perjuicios padecidos por Luz Marina Gómez Ramírez, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Luis Orlando Ramírez Zuluaga. En consecuencia, se les condena a indemnizarle por concepto de lucro cesante consolidado y futuro la suma de seiscientos sesenta y nueve millones setecientos setenta y tres mil ciento diez pesos (\$669.773.110), por perjuicios morales sesenta millones de pesos (\$60.000.000) y por daño a la vida de relación, treinta millones de pesos (\$30.000.000)”.

Esta excepción se propone en atención al criterio jurisprudencial establecido por la Corte Suprema de Justicia, que ha determinado que el daño a la vida de relación se concede únicamente a la víctima directa en caso de lesiones personales, por lo que es improcedente acceder a las pretensiones del extremo actor en la forma solicitada, puesto que solicita la indemnización de este perjuicio frente a personas que no fueron víctimas directas del accidente de tránsito, adicionalmente, no existe en el plenario un dictamen de PCL que acredite un daño sufrido como consecuencia del accidente el cual haya alterado las actividades diarias realizadas por la señora Diana González la cuales le impidan disfrutar la vida en la forma en que lo hacía de forma previa a la ocurrencia de los hechos. Además, en todo caso, si este perjuicio fuera reconocido, se solicitó por sumas que exceden los baremos jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que el impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa. En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia indicó:

*“(...) b) Daño a la vida de relación:*

**Este rubro se concede únicamente a la víctima directa** del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (...)”<sup>21</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original).<sup>13</sup>

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento del daño a la vida de relación a los demandantes, pues no fueron víctimas directas del accidente de tránsito. En efecto, conforme a la sentencia SC9193-2017 de la Corte Suprema de Justicia, dicho perjuicio resulta procedente **únicamente en favor de la víctima directa**<sup>14</sup>. Así mismo, también pasó por alto aplicar la sentencia SC 562-2020 de la CSJ, en donde se sostuvo la misma postura, esto es, el daño a la vida de relación sólo se le reconoce a la víctima directa del daño en caso de lesiones personales, es decir, el mismo solo procedería frente a la señora Diana Patricia González en caso de que la responsabilidad civil de la parte pasiva se encuentre demostrada y, adicionalmente, la parte interesada pruebe de manera suficiente la alteración a sus condiciones de existencia.

Sobre este particular, resulta fundamental que el señor Juez tenga en cuenta los siguientes extractos jurisprudenciales, que indiscutiblemente muestran el error del extremo accionante:

- **Sentencia SC9193-2017**<sup>15</sup>:

<sup>13</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC5340-2018 de 7 de diciembre de 2018. Magistrado Ponente: Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo.

<sup>14</sup> “b) Daño a la vida de relación: **Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo** (...)”.

<sup>15</sup> Sentencia SC9193-2017, Rad. 11001-31-03-039-2011-00108-01, 28 de junio de 2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

**b) Daño a la vida de relación:**

Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales.

• **SC 562-2020<sup>16</sup>:**

**b) Daño a la salud, a las condiciones de existencia o a la vida en relación.**

Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida en condiciones normales.

De las anteriores sentencias de la Corte Suprema emerge con claridad como el daño a la vida de relación no puede ser reconocido a personas distintas a la víctima directa del daño, por lo tanto, en caso de una hipotética condena, el Juez de conocimiento se encontraría limitado a reconocer dicho rubro exclusivamente a la señora Diana Patricia González. Lo anterior sin desconocer que el hipotético perjuicio que se reconozca a la víctima directa no podrá tener un valor equivalente al solicitado en la demanda pues es claro que la tasación de 100 SMLMV resulta excesiva en relación con una víctima que ni siquiera ha acreditado mediante un dictamen de PCL la gravedad de las lesiones, ni como estas han alterado sus condiciones de existencia.

Conforme a lo manifestado, no existe sustento alguno para que la parte demandante pueda reclamar el perjuicio de daño a la vida de relación pues dicha solicitud desconoce los parámetros establecidos jurisprudencialmente para su procedencia, por lo tanto, el Despacho no puede conceder dichas pretensiones.

Solicito al juzgado declarar probada esta excepción.

**6. IMPOSIBILIDAD DE RECONOCER PERJUICIOS A TÍTULO DE DAÑO A LA SALUD A FAVOR DE LA DEMANDANTE**

En el presente caso no sólo es jurídicamente inadmisibles predicar responsabilidad alguna en cabeza de los demandados por concepto de daño a la salud, sino que, además, tampoco es jurídicamente viable imponer condena alguna tendiente al pago por concepto de esta tipología de perjuicio, toda vez que el mismo en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil no constituye un daño resarcible, adicionalmente, desde la perspectiva de la jurisprudencia el daño a la salud es un perjuicio que se fundamenta en el mismo tipo de daños resarcidos por el perjuicio denominado daño a la vida de relación, por lo que, en caso de una eventual condena, el acceder favorablemente a esta pretensión teniendo por acreditada la alteración a las condiciones

<sup>16</sup> Sentencia SC 562-2020, Rad. 73001-31-03-004-2012-00279-01, 27 de febrero de 2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

de existencia, implicaría un doble resarcimiento por el mismo tipo de daños incurriendo en el enriquecimiento sin justa causa de la parte demandante.

Tal y como lo ha reconocido la Corte en la sentencia del 5 de agosto de 2014, que contiene la jurisprudencia más reciente de esa corporación respecto de la tipología y la reparación del daño inmaterial, se estableció lo siguiente:

*“(...) De ahí que el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional (...)”*

Ahora bien, es claro que en virtud del principio iura novit curia el juzgador puede equipar el perjuicio reconocido por daño a la vida de relación al de daño a la salud, por lo que el hipotético reconocimiento del primero de estos perjuicios subsumiría el reconocimiento de daño a la salud pretendido por la parte actora, esto teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que se trata de un mismo perjuicio con diferentes denominaciones, a saber:

*“(...) En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; **ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico)**; iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave de las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en un proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación (...)”<sup>17</sup>*

Teniendo en cuenta lo previamente expuesto, es claro que el Juzgador no puede reconocer a favor de la parte demandante este tipo de perjuicio pues de hacerlo otorgaría una suma económica por cada concepto cuando su fundamento es el mismo, lo cual a todas luces es inviable.

Debe tenerse en cuenta que la parte actora sustenta el pedimento de este perjuicio en las mismas bases sobre las cuales solicita el reconocimiento del perjuicio por daño a la vida de relación, pues esa categoría implica la afectación psicofísica, es decir que en ella se incluyen las supuestas consecuencias derivadas de las lesiones producidas. Por lo que no es posible reconocer bajo un nombre distinto el mismo perjuicio.

<sup>17</sup> sentencia del 4 de Mayo de 2011, Sección Tercera del Consejo de Estado

- Pero además nótese que la Corte Suprema de Justicia en sentencia **SC 562-2020**<sup>18</sup> equiparó en su titulación el daño a la vida de relación con el daño a la salud para reiterar que aquel corresponde al menoscabo a la integridad psicofísica:

**b) Daño a la salud, a las condiciones de existencia o a la vida en relación.**

Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que lo impedirá tener una vida en condiciones normales.

Por cuanto las secuelas permanentes e irreversibles que sufrió la menor alteraron sus condiciones de existencia y su integridad psicofísica, de manera que no podrá disfrutar de la felicidad propia de los primeros años de infancia, ni mucho menos podrá realizar las actividades lúdicas y formativas que acostumbra hacer un niño que goza de buena salud, este rubro se tasaré en la suma de setenta millones de pesos (\$70'000.000).

Conforme al criterio de la Corte Suprema, es claro que el daño a la salud se traduce en alteraciones físicas que hacen parte del daño a la vida de relación porque encarnan el mismo fundamento. Luego es imposible pretender indemnizar una misma situación fáctica so pretexto de dos categorías distintas.

Adicionalmente a lo anterior, se puede extraer que la Corte Suprema de Justicia concretó el género de los perjuicios inmateriales mediante las siguientes especies: daño moral; daño a la vida de relación y el daño a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional. De lo anterior, resulta claro que el daño a la salud no es un perjuicio inmaterial reconocido en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil por la Corte Suprema de Justicia. Razón por la cual, **NO** es un perjuicio susceptible de ser valorado, como quiera que el presente asunto se tramita ante la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil y no ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Aunado a lo anterior, no es procedente reconocer esta categoría, toda vez que, el demandante no probó la supuesta alteración en sus condiciones de vida, conclusión que se puede señalar teniendo en cuenta que no obra en el expediente ninguna prueba que dé cuenta del supuesto cambio que las condiciones de vida de la parte actora sufrieron como consecuencia del accidente de tránsito.

Corolario de lo anterior es que no solo no se encuentra demostrada la afectación psicofísica que influye en las condiciones de vida de los demandantes, sino que incluso bajo el supuesto de que dicha afectación se demuestre, no será posible derivar de la misma el reconocimiento del perjuicio denominado daño a la salud, ya que este no se encuentra reconocido por la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y, en todo caso, su reconocimiento implicaría un enriquecimiento sin justa causa a favor de la parte actora pues sus

---

<sup>18</sup> Sentencia SC 562-2020, Rad. 73001-31-03-004-2012-00279-01, 27 de febrero de 2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

fundamentos guardan identidad con el reconocimiento del daño a la vida de relación.

Por lo anterior solicito declarar probada esta excepción.

## 7. INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, CONSECUENTEMENTE NO SE PUEDE ORDENAR SU INDEMNIZACIÓN

En cuanto a la supuesta pérdida de oportunidad, debo indicar como primera medida que los ánimos de ganancia eventuales o hipotéticos no son susceptibles de sufrir menoscabo, pues la certeza es una característica del daño indemnizable. En el caso que nos ocupa, se tiene que el apoderado de la parte actora en el escrito de demanda no explica cuál es la supuesta oportunidad que ha perdido la señora Diana González y mucho menos aporta alguna prueba tendiente a demostrar la configuración de este daño, toda vez que ni siquiera se ha determinado, la existencia de la oportunidad perdida. Luego, ni si quiera la parte ha podido precisar en qué se circunscribe el daño supuestamente sufrido y por el cual debe ser indemnizado, de tal manera que solo hay evidentes intenciones de ganancia que no corresponden a un daño tangible, cierto y preciso.

Es menester, traer a consideración el postulado de la H. Corte Suprema frente al tema en particular, para ello resulta de utilidad lo dispuesto en la sentencia SC5885-2016, en donde se explica de manera detallada los presupuestos que componen esta tipología de daño y los supuestos para que pueda ser indemnizado, veamos:

*“(...) Sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de esta Corporación refieren a: (i) **Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad**, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) **Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el beneficio**, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización [...]; y (iii) **La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse que [...] su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos (...)**”*

De lo anterior, es pertinente resaltar que ninguno de los presupuestos que ha definido la jurisprudencia se encuentran satisfechos porque: (i) ni siquiera en el escrito de demanda se ha expresado puntualmente cuál es la oportunidad perdida, es decir no hay certeza; (ii) no se expresa en que consiste el detrimento como consecuencia de la oportunidad presuntamente frustrada por el evento dañoso y; (iii) de los sustentos fácticos y material probatorio no se vislumbra si quiera un resultado que esperaba la víctima, es decir no existen la oportunidad y el daño es netamente fantasioso.

Consecuentemente, se tiene que, en definitiva, olvidó la parte demandante que para que se considere que se

consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente, siendo esta una legítima oportunidad seria, verídica, real y actual, circunstancia que no sucedió, pues se reitera que la demanda se caracteriza por su orfandad probatoria. Efectivamente, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa que ni siquiera se define en el escrito de demanda, circunstancia que implica necesariamente el fracaso de esta pretensión.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

## **8. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO DENOMINADO LUCRO CESANTE**

El lucro cesante no puede ser reconocido por el Juez a menos de que el mismo quede plenamente demostrado en el proceso, no obstante, los demandantes no aportan prueba idónea al respecto incumpliendo con la carga probatoria que les corresponde, dejando en tela de juicio que la señora Diana Patricia González hubiere percibido un ingreso el cual se haya visto disminuido en razón del accidente de tránsito, de igual forma, no se aportó al proceso dictamen de PCL motivo por el cual no se acredita la afectación que le impide a la señora Diana Patricia González desarrollar determinada actividad laboral disminuyendo el supuesto ingreso percibido al momento del accidente, adicionalmente, la liquidación de este rubro es imprecisa toda vez que toma como base el salario mínimo del año 2023 pese a que el supuesto accidente tuvo lugar en el año 2022, es decir, si incluso se llegare a considerar la posibilidad del reconocimiento del mencionado perjuicio no existe justificación alguna para que la contraparte decida liquidar el mismo sobre el salario vigente en el año 2023. Por lo anterior es improcedente que el juzgado reconozca el mentado perjuicio y peor aún en la forma que lo solicitan los accionantes pues ello implicaría reconocer un perjuicio no acreditado.

En esta línea, es pertinente señalar que la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC11575-2015 del 05 de mayo de 2015, manifestó:

*“(…) El lucro cesante, jurídicamente considerado en relación con la responsabilidad extracontractual, es entonces la privación de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, “está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho” (CSJ SC de 7 de mayo de 1968)”.*

De forma complementaria, y en relación con el lucro cesante futuro, mediante sentencia SC16690 de 2016 ha manifestado la misma Corporación que:

*“(…) procede la reparación de esta clase de daño en la medida en que obre en autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejarían de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (…)”*

Como se evidencia en el caso concreto, la parte demandante no ha dado cumplimiento a los parámetros establecidos jurisprudencialmente con el fin de demostrar que la señora Diana González percibiera un ingreso mensual ni su valor, o la forma de determinar el mismo. En igual sentido, no ha demostrado la PCL que dé cuenta que la víctima directa dejó de percibir ingreso alguno debido al accidente de tránsito.

En efecto, al verificar el escrito de la demanda la parte actora manifiesta que al momento del supuesto accidente de tránsito la señora Diana González tenía 39 años de edad y contaba con un ingreso mensual equivalente al salario mínimo, sin embargo, no existe prueba alguna en el expediente que permita corroborar el ingreso mensual señalado, limitando su “existencia” a las simples afirmaciones realizadas en el escrito petitorio por la parte actora, siendo improcedente su reconocimiento e incluso su liquidación sobre esta base salarial, junto con el 25% correspondiente a las prestaciones sociales teniendo en cuenta la incertidumbre de la existencia de una relación laboral o de índole similar que justifique que la víctima perciba pago alguno por este concepto.

Sumado a lo anterior, mediante la consulta de la afiliación al sistema de seguridad social en salud, es posible verificar que la víctima se encontraba afiliada al régimen subsidiado mucho tiempo antes de la ocurrencia de los hechos, e incluso, para el momento de los hechos ni si quiera cuenta con afiliación al mencionado sistema, veamos:

**Resultados de la consulta**

**Información Básica del Afiliado :**

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	38600845
NOMBRES	DIANA PATRICIA
APELLIDOS	GONZALEZ PRECIADO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

**Datos de afiliación :**

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
RETIRADO	CALISALUD E.P.S	SUBSIDIADO	01/10/2008	14/02/2010	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión: 05/26/2024 22:14:26 Estación de origen: 2801:12:c800:2070::1

Dicha situación no puede pasar desapercibida teniendo en cuenta que el régimen subsidiado en Colombia se encuentra destinado a la población de escasos recursos económicos, lo que denota la falta de ingresos de la demandante que permitan deducir que producto del accidente se generó el perjuicio patrimonial reclamado, más aún, cuando ni siquiera cuenta con afiliación al sistema desde el año 2010.

Por otra parte, el lucro cesante solicitado en la demanda se liquida con base en una supuesta PCL equivalente al 19%, sin embargo, no obra en el plenario el dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez que acredite dicha limitación que, consecuentemente, repercuta en los ingresos obtenidos por la parte actora, por lo que su cálculo se basa en meras especulaciones contrariando los parámetros señalados en la

jurisprudencia.

Finalmente, no existe elemento de prueba que dé cuenta que la víctima haya percibido un salario mínimo y mucho menos un ingreso equivalente al salario mínimo del año 2023, por lo cual el monto utilización para la liquidación del perjuicio no tiene sustento alguno y resulta arbitrario.

De esta forma, la inexistencia de las pruebas conducentes para demostrar la causación de este perjuicio es evidente porque: i) no se allega prueba alguna que acredite que la señora Diana González se encontraba laborando al momento del accidente; ii) no existe prueba alguna que acredite el ingreso percibido por la víctima al momento del accidente, y; iii) no se verifica la existencia de ninguna prueba que permita concluir la existencia de la pérdida de capacidad laboral producto del supuesto accidente la cual le impida a la señora Diana González. Por lo tanto, es imposible reconocer el perjuicio reclamado pues carece de todo sustento, lo que evidencia que la parte demandante no cumplió la carga impuesta en el artículo 167 del Código General del Proceso y en la jurisprudencia.

Por lo anterior solicito al señor juez declarar probada esta excepción.

### **EXCEPCIONES FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO**

#### **9. IMPOSIBILIDAD DE AFECTAR LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL BÁSICA NO. C 2000257911 POR AUSENCIA DE COBERTURA MATERIAL**

Esta excepción se propone teniendo en cuenta que el presente proceso tiene fundamento en la supuesta existencia de un contrato de transporte entre la señora Diana Patricia González y la empresa Transportes Especiales Brasília S.A. en el marco del cual el vehículo sufrió un supuesto accidente completamente ajeno a la responsabilidad del conductor del automotor de placa ETK-163 del cual habría resultado lesionada la señora Diana González motivando la reclamación de perjuicios realizada por ella y sus familiares mediante la demanda. Es decir, aquellas erogaciones pretendidas se encuentran vinculadas con las supuestas lesiones de quien tendría la calidad de pasajera, por ende es imposible que se pueda afectar la póliza de responsabilidad civil extracontractual porque dichas circunstancias no se encuentran contempladas en su cobertura.

En las condiciones de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C 2000257911 se señaló que tal póliza únicamente brindaría cobertura respecto a terceros y no en relación a perjuicios derivados de afectaciones a pasajeros y/o ocupantes del vehículo de placa ETK-163. Al alegar la parte demandante que la señora Daniela González se desplazaba en calidad de pasajera del rodante de placas ETK-163, resulta claro que dicho contrato de seguro no brinda cobertura.

Lo anterior encuentra respaldo en la delimitación de los riesgos trasladados al asegurador, en donde aquella de manera libre estipula que eventos son sujetos a cobertura y cuales no, tal como lo avala el 1056 del Código de Comercio que dispone:

*“Art. 1056. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”*

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorpora en la póliza determinadas barreras cualitativas que exigen a la aseguradora de la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura, y que se encuentran consignadas tanto en las condiciones particulares, como en las condiciones generales del referido contrato de seguro.

Como se manifestó en líneas anteriores, mi representada sólo está obligada a responder, al tenor de las obligaciones expresamente estipuladas en los contratos de seguro, luego no puede entenderse comprometido al asegurador por riesgos que no le fueron trasladados por el tomador y que se encuentren por fuera del objeto de cobertura. En este punto es preciso señalar que, de conformidad con las condiciones de la póliza de responsabilidad civil extracontractual básica No. C 2000257911 vigente desde el día 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2023, la cobertura se concretó así:

### 3.1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGUROS MUNDIAL CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, CAUSADOS A TERCEROS DEBIDAMENTE ACREDITADOS Y DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE DE ACUERDO CON LA LEY INCURRA EL ASEGURADO AL CONDUCIR EL VEHÍCULO DESCRITO EN LA PÓLIZA O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE CONDUZCA DICHO VEHÍCULO CON SU AUTORIZACIÓN, PROVENIENTE DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO O SERIE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO RESULTADO DE UN SÓLO ACONTECIMIENTO Y OCASIONADO POR EL VEHÍCULO ASEGURADO, O CUANDO EL VEHÍCULO ASEGURADO SE DESPLACE SIN CONDUCTOR DEL LUGAR DONDE HA SIDO ESTACIONADO CAUSANDO UN ACCIDENTE O SERIE DE ACCIDENTES RESULTADO DE ESE HECHO.

Sin perjuicio de lo anterior, y sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad alguna a cargo la demandada, ni mucho menos de mi procurada, es preciso aclarar que, si bien la póliza de responsabilidad civil extracontractual básica No. C 2000257911 vigente del 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2023, celebrada con la accionada, estaba vigente durante la ocurrencia de los hechos, ésta no podrá afectarse por cuanto únicamente tienen el fin de cubrir los daños o perjuicios que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad extracontractual que ocasione a terceros, es decir que los perjuicios reclamados no deriven de afectación sufrida por uno de los pasajeros del automotor asegurado.

En virtud de esto, debe resaltarse que el espíritu de esta póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es proteger el patrimonio del asegurado por los daños que en el ejercicio de la conducción del vehículo amparado genere lesiones, muerte o daños a bienes de terceros, lo que implica necesariamente que no aquellos que se derivan de lesiones de los pasajeros, siendo esta la calidad que supuestamente ostentaba la víctima.

En conclusión, la póliza de responsabilidad civil extracontractual no ofrecería cobertura material para el reclamo judicial que nos ocupa. Nótese que los demandantes pretenden la indemnización de los perjuicios derivados de las lesiones de la señora Diana González, supuestamente ocasionados cuando se desplazaba como ocupante o pasajera del vehículo asegurado de placa ETK-163; es decir que aquellos encontraría sustento exclusivamente en el incumplimiento del deber del transportador de llevar a salvo al pasajero al lugar

de destino, en otras palabras si ese incumplimiento contractual no se verificaba los aquí demandantes no tendrían la posibilidad de solicitar la indemnización, por lo tanto el seguro que en gracia de discusión podría afectarse es exclusivamente el de responsabilidad contractual que otorga cobertura por lesiones o muerte de pasajeros.

Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente se declare probada esta excepción.

**10. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL BÁSICA NO. C2000257912 Y NO ENCONTRARSE PROBADA LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL C.CO.**

Es necesario aclarar que, para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil contractual del asegurado porque, como se dijo antes, no se probó la existencia del hecho, el daño y el nexo de causalidad entre estos, toda vez que se configura una completa ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos del 4 de octubre de 2022, es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de los demandados, lo anterior aunado al hecho de que se evidencia una total orfandad probatoria respecto al valor de los perjuicios solicitados, pues no se ha corroborado que aquellos en efecto se hayan causado.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

*“(...) **ARTÍCULO 1077.<CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso** (...)” (subrayado y negrilla fuera del texto original)*

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina sobre el tema:

*“(...) Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)”*

*“(...) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual, si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)”*

*“(...) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (...)”<sup>19</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado o beneficiario quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

Así pues, al interior del caso de marras, es claro como la parte demandante esta llamada a aportar los medios probatorios que permitan acreditar la estructuración de los elementos propios de la responsabilidad civil contractual con el fin de demostrar la ocurrencia del riesgo asegurado contenido en la póliza de responsabilidad civil contractual básica No. C 2000257912, no obstante, la parte demandante soporta sus pretensiones únicamente en el Informe Policial de Accidente de Tránsito el cual adolece de sendas falencias a fin de acreditar lo pretendido por la activa de la acción, toda vez que el agente de tránsito que la elaboró no fue testigo presencial del suceso al punto de haber elaborado el mencionado informe un día después de los supuestos sucesos.

En efecto, siendo inexistente la responsabilidad civil contractual en cabeza del asegurado al no contar con soporte probatorio alguno, no se realizó el riesgo asegurado en la póliza de responsabilidad civil contractual básica No. C 2000257912 contratada con mi representada, el cual para el caso concreto se expresa mediante el amparo de incapacidad total temporal, que de conformidad con el tenor literal de las condiciones generales del negocio asegurativo en la que literalmente se estipuló lo siguiente:

---

<sup>19</sup> ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

### 3.3 INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL

ES LA DISMINUCION TRANSITORIA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO DEL PASAJERO, ASÍ COMO LOS PERJUICIOS MORALES DEL PASAJERO COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEL VEHÍCULO ASEGURADO RELACIONADO EN LA PÓLIZA, POR EL CUAL EL ASEGURADO SEA CIVILMENTE RESPONSABLE.

CONSTITUYE INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL TODA LIMITACIÓN QUE IMPIDA A UN PASAJERO, EN UN PERIODO DETERMINADO DE TIEMPO, DESEMPEÑAR CUALQUIER OCUPACIÓN U OFICIO REMUNERADO PARA EL CUAL ESTÉ RAZONABLEMENTE CALIFICADO EN ATENCIÓN A SU EDUCACIÓN O EXPERIENCIA. SEGUROS MUNDIAL INDEMNIZARÁ HASTA UN MÁXIMO DE (120) CIENTO VEINTE DÍAS, LA CANTIDAD DEJADA DE PERCIBIR, QUE SERÁ DETERMINADA POR EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL O AL INGRESO DEMOSTRADO EN EL ÚLTIMO

Como podemos apreciar, la póliza de responsabilidad civil contractual se extiende exclusivamente a cubrir los perjuicios causados en virtud de la responsabilidad en que incurra el asegurado, durante la vigencia del seguro, por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a pasajeros que surjan por la conducción del vehículo asegurado, responsabilidad que en este caso nunca existió, pues es evidente la ausencia de los elementos esenciales para la configuración del título de imputación alguno en contra de la asegurada.

Lo anterior, debido a que no hay ningún tipo de evidencia en el plenario que dé cuenta que el accidente de tránsito ocurrido el día 4 de octubre de 2022, se haya originado por una conducta atribuible a la empresa de transporte asegurada o sus agentes.

Corolario de lo expuesto es que la parte demandante no demostró la responsabilidad civil contractual en cabeza del asegurado al no haber aportado las pruebas idóneas que den cuenta de lo sucedido en forma detallada, por lo tanto, tampoco acreditó la ocurrencia del siniestro, es decir, del riesgo asegurado en la póliza de RCC, siendo improcedente su afectación.

De otro lado, en lo que atañe a la cuantía de la pérdida, la misma no se encuentra acreditada debido a que: i) no se aporta al plenario prueba que dé cuenta de los ingresos percibidos por la demandante y la PCL que trajo consigo la reducción en el valor de dichos ingresos; ii) no se aporta prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas consecuencia del accidente por las cuales sea procedente solicitar el reconocimiento del perjuicio moral; iii) no se aporta prueba alguna de la alteración a las condiciones de existencia que justifiquen los pedimentos del daño a la vida de relación y mucho menos del daño a la salud, toda vez que este último perjuicio no es reconocido por la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, y; iv) no obra prueba alguna que dé cuenta de la pérdida de oportunidad reclamada. Por lo anterior, es claro que la parte demandante tampoco probó la cuantía de la pérdida.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse: i) que la póliza de responsabilidad civil contractual básica No. C 2000257912 no podrá ser afectada por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil contractual del asegurado; (ii) la parte actora no acreditó en forma alguna la cuantía de la pérdida, siendo este el segundo requisito indispensable para la procedencia de la afectación de la póliza. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido

la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

#### **11. IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR A LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DESDE LA SOLICITUD EXTRAJUDICIAL, LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA O LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO**

Es claro que para que nazca a la vida la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de mi representada, se requería que el asegurado cumpliera con la carga establece en el artículo 1077 del C.Co., ante la ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida no puede predicarse la existencia de obligación alguna y por ende tampoco puede considerarse que mi representada se encuentre en mora, dado que, no es posible predicarse la mora de una obligación inexistente, por lo dicho es claro que ningún respaldo encuentra la solicitud de pago de intereses de mora cuando la parte demandante no ha demostrado fehacientemente la ocurrencia del siniestro y tampoco la cuantía de la pérdida. Por lo anterior mientras se encuentren insatisfechos los dos presupuestos anteriores no es posible afirmar que haya nacido obligación alguna y mucho menos que se encuentre insatisfecha.

Debe decirse que en este caso se encuentra en una enorme zona de penumbra los hechos que rodearon la producción del accidente y además que el mismo haya tenido la entidad de causar los perjuicios de índole patrimonial y extrapatrimonial que señala la parte actora. Es decir se encuentra insatisfecho el cumplimiento de la acreditación del siniestro y la cuantía de la pérdida y que siendo estos dos elementos esenciales en los términos del artículo 1077 del C.Co para acreditar el derecho a recibir una indemnización por parte del asegurador debe afirmarse enfáticamente que mientras no se pruebe tales presupuestos no es posible considerar que ha nacido a la vida jurídica la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de Compañía Mundial de Seguros S.A. Por lo dicho, salta a la vista que el asegurado no ha acreditado la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida, por ende no podría tampoco predicarse la mora de una obligación que no ha surgido como consecuencia de la misma omisión en la acreditación de las cargas del artículo 1077 del C.Co que se encuentra en cabeza de los demandantes.

Ahora bien, debe dejarse claro que en el hipotético y remoto evento en que el Honorable Despacho considere que la indemnización es procedente y que existe obligación por parte de Compañía Mundial de Seguros S.A., se deberá tener en consideración que la certeza sobre dicho derecho sólo quedará probado al momento de proferirse sentencia, por lo que si el Despacho encontrara sustento de tal pretensión es claro que ello implicaría que los presupuestos del artículo 1077 se demostraron en el curso del proceso, después de surtirse el debate probatorio y por ende no podría condenarse al pago de intereses moratorios desde el momento en que se presentó la demanda o se notificó su auto admisorio.

Como sustento de lo anterior, se encuentra que la Corte Suprema de Justicia en cuanto al momento en el que se empiezan a causar los intereses moratorios, ha establecido en distintas oportunidades que éstos empiezan a causarse a partir de la ejecutoria del fallo judicial que da certeza a la obligación. Específicamente, en la reciente sentencia del 26 de mayo de 2021, en la que se indicó textualmente:

*“(…) **Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios**, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para **disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo** (…)”<sup>20</sup>*

Aunado al anterior pronunciamiento, es relevante resaltar cómo la Corte Suprema ha dicho que la sanción a la que corresponde los intereses de mora no puede ser aplicada de manera objetiva, sino que debe atenderse al caso concreto a fin de evaluar el motivo de retardo en el pago, lo anterior en palabras de la Corte al indicar que:

*“(…) De igual modo, en providencia del 29 de abril de 2005, reiteró: “ a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el artículo 1080 del C. de Co., desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños (…)”*

*Los fragmentos jurisprudenciales que acaban de citarse explican que la aseguradora sólo incurre en mora cuando no paga la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la reclamación, si ésta se ha hecho debidamente por el asegurado y con el cumplimiento de las carga probatorias sobre la existencia del siniestro y el valor del daño.*

*Pero esta sanción-ha afirmado esta Corte-no se impone de manera objetiva, pues para que haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en todos los casos el motivo de retraso en la liquidación.*

*En ese orden- prosiguió esta corporación- si la excusa de la aseguradora consiste en que no fue posible determinar el monto del daño, y logra probar ese hecho en el proceso, entonces no habrá lugar a imponerle sanción alguna, porque es claro que la falta de satisfacción oportuna de la obligación no se debió a su culpa, tal como ha sido explicado por esta sala: “En consecuencia, el monto líquido de la prestación es presupuesto estructural de la obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por la cual, en ausencia de comprobación, no es exigible ni la indemnización ni la sanción moratoria (…)”<sup>21</sup>. (Sentencia de 27 de agosto de 2008.Exp- 1997-14171-01*

Lo anterior, deja claro que como a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir los

<sup>20</sup> Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC1947-2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. 26 de mayo de 2021.

<sup>21</sup> Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5681 de 2018, MP. Ariel Salazar Ramírez

presuntos daños producto del accidente del 4 de octubre de 2022 y tampoco la cuantía de la pérdida reclamada, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el demandante efectuó la notificación del auto admisorio de la demanda, o desde que presentó la misma. Luego, antes de proferirse el fallo no existe certeza sobre la obligación presuntamente pendiente de indemnizar.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

## **12. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA RCC BÁSICA No. C 2000257912 ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO**

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca en el límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, situación que desconocerse constituiría un enriquecimiento injustificado debido a que no existe evidencia de los perjuicios solicitados por la parte actora, esto es, el lucro cesante, el daño moral, el daño a la vida de relación, el daño a la salud y la pérdida de oportunidad.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

***“(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...).”***<sup>22</sup> (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización

<sup>22</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que se busca sean reconocidas están indebidamente cuantificadas por la orfandad probatoria. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes debido a que: i) no se aporta al plenario prueba que dé cuenta de los ingresos percibidos por la demandante y la PCL que trajo consigo la reducción en el valor de dichos ingresos; ii) no se aporta prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas consecuencia del accidente por las cuales sea procedente solicitar el reconocimiento del perjuicio moral; iii) no se aporta prueba alguna de la alteración a las condiciones de existencia que justifiquen los pedimentos del daño a la vida de relación y mucho menos del daño a la salud, toda vez que este último perjuicio no es reconocido por la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, y; iv) no se encuentra acreditada la pérdida de oportunidad reclamada. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados y equivocadamente tasados que hace la parte demandante, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

### **13. EN TODO CASO NO PODRÁ SUPERARSE EL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL BÁSICA NO. C 2000257912**

Se propone esta excepción, sin que con ello se esté comprometiendo mi procurada, a fin de manifestar que la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora sólo surge cuando efectivamente el riesgo amparado en el contrato de seguro fue efectivamente realizado, en los términos de su cobertura y no opere ninguna causal legal o convencional de exclusión o inoperancia del mismo. Así las cosas, si hubiere lugar a la responsabilidad de la Compañía, la misma se sujetará a lo consignado al tenor literal la póliza y, por tanto, a las condiciones particulares de la misma, entre ellas, a la suma asegurada, el deducible y las exclusiones que se hayan pactado.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante se limita a la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta:

***“(…) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la***

*suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (...)*

La norma antes expuesta es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“(...) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (...)”<sup>23</sup>.*

En orden de lo comentado, las condiciones estipuladas en la póliza de **RCC básica No. C 2000257912**, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., indicarán el límite de su obligación indemnizatoria, en el remoto caso en que se profiera una sentencia en su contra.

Tales condiciones fueron establecidas así en las condiciones particulares del contrato de seguro No. C 2000257912:

---

<sup>23</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

Póliza de DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL BÁSICA PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO

Versión Clausulado Número 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D001  
Código Anexo de Asistencia

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
NIT 860.037.013-6  
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3  
Teléfono:(601)2855600

No. Póliza C 2000257912 No. de Certificado No. Riesgo 1-135

Tipo de Documento ADICIONAR RIESGO Fecha de Expedición 2022-08-08 Suc. Expedidora CALI

Vigencia Desde 00:00 Horas del D 07/ M08 / A2022 Vigencia Hasta 00:00 Horas del D 07/ M08 / A2023 Días 365

Vigencia del Certificado Desde 00:00 Horas del D 07/ M08 / A2022 Vigencia del Certificado Hasta 00:00 Horas del D 07/ M08 / A2023

Tomador TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A. N°. Doc. Identidad 800135595  
Dirección CALLE 70 # 5 - 42 Ciudad CALI VALLE Teléfono 6560656

Asegurado TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A. N°. Doc. Identidad 800135595  
Dirección CALLE 70 # 5 - 42 Ciudad CALI VALLE Teléfono 6560656

Beneficiario TERCEROS AFECTADOS CC/NIT  
Beneficiario CC/NIT

**RIESGO ASEGURADO**

Cod. Fasecolda Modelo 2020 Servicio ESPECIAL Color

Placa ETK163 Marca y clase HINO Tipo de Vehículo Bus

Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros 40 No. Motor JOSETY14144 No. Chasis / Serie

Dpto/Municipio Valor Comercial Valor Accesorios Valor Comercial Total

**CONDICIONES DE COBERTURA**

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	%	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
MUERTE ACCIDENTAL CADA PASAJERO	SMMMLV100.00	Sin Deducible	Sin Deducible
INVALIDEZ PERMANENTE CADA PASAJERO	SMMMLV100.00	Sin Deducible	Sin Deducible
INCAPACIDAD TEMPORAL CADA PASAJERO	SMMMLV100.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	SMMMLV100.00	Sin Deducible	Sin Deducible
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
PERJUICIOS MORALES	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible

Siendo las cosas de ese modo, si en gracia de discusión naciera obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, esta no podrá exceder el límite del valor asegurado correspondiente a 100 SMLMV a la fecha de ocurrencia del accidente, esto es \$100.000.000, porque con ello, además, se garantiza el equilibrio económico que llevó a COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. a asumir el riesgo asegurado.

Debe Recordarse en este sentido que el artículo 1089 del C.Co prescribe que en ningún caso la indemnización podrá exceder el valor del interés asegurado en el momento del siniestro, por lo tanto, en caso de una hipotética condena, el valor máximo a reconocer equivaldría al ya señalado.

Por lo anterior, ruego al despacho que, si eventualmente reconociera indemnizaciones en favor de la parte actora, al momento de decidir sobre las mismas, tenga en cuenta las condiciones pactadas dentro del condicionado de la póliza referida en la cual se ampara el riesgo de responsabilidad civil contractual.

Solicito declarar la prosperidad de esta excepción

**14. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA RCC BÁSICA No. 2000257912**

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro No. C 2000257912, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan

contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro No. C 2000257912 en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. C 2000257912 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

#### **15. DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

#### **16. EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES**

Sin que esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna, es pertinente mencionar que la obligación de la aseguradora sólo nace si efectivamente se realiza el riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencionales o legales. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada se limita a la suma asegurada, además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el estatuto mercantil, que en su Art. 1079 establece que "(...) *El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*". Por lo que el Despacho tendrá que resolver la relación sustancial que vincula a mi mandante con este proceso en atención a las condiciones de los aseguramientos por ella expedidos.

Se hace imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc.

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para vincular a mi mandante en esta causa, al contenido de las condiciones de la póliza.

Consecuentemente la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende rigurosamente de las diversas estipulaciones contractuales, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según esas condiciones y no a cualquier evento, ni a cualquier riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo; por ello, al no haberse demostrado la realización del evento asegurado, inadmisiblemente resultaría que, con fundamento en los hechos que hoy son objeto de litigio, se afecte la póliza vinculada y se le exija a mi mandante pago indemnizatorio alguno.

Ciertamente, su afectación es improcedente en este caso toda vez que, de conformidad con lo ya ampliamente explicado no se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil contractual y, aún si se hallaren probados, no se acreditó la ocurrencia del riesgo trasladado a la Compañía. Así entonces, como no se reúnen los requisitos de la responsabilidad en cabeza de la asegurada a la evidencia obrante en el plenario, no se puede predicar responsabilidad en cabeza de la entidad y, consecuentemente de mi representada.

En este orden de ideas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## **17. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS**

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley o en el contrato por el cual se vincula a mi mandante, lo anterior en atención al mandado contenido en el artículo 282 del Código General del Proceso.

### **VI. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDA**

#### **A. INTERVENCIÓN FRENTE A DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS**

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de controvertir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las

diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al H Juez, proceder de conformidad.

**B. FRENTE A LA SOLICITUD DE OFICIAR A LA FISCALÍA 60 LOCAL DE CALI**

Me opongo a que su juzgado oficie a la fiscalía 60 local de Cali para que expida copia del expediente penal con radicación No. 760016099165202284608, ya que, conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 78 del C.G.P., la parte debe abstenerse de solicitar al Juez la consecución de documentos que hubiere podido obtener mediante el derecho de petición.

Luego, la parte demandante debe elevar derecho de petición a la mencionada entidad si desea obtener copia del expediente penal referido.

**C. CONTRADICCIÓN DE DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO**

Conforme a lo establecido en el artículo 228 del Código General del Proceso, solicito que se decrete la comparecencia a audiencia del perito que la parte demandante designe para la elaboración del RAT, con el fin de controvertir el concepto o dictamen pericial que rinda frente al accidente de tránsito, el croquis, en el IPAT y demás por menores.

**D. OPOSICIÓN AL DECRETO DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL SOLICITADA**

Me opongo al decreto de la prueba solicitada por la parte demandante toda vez que, conforma a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 236 del Código General del Proceso “(...) *Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba (...)*”.

Por lo anterior, la inspección judicial resulta ser impertinente e inconducente debido a que la parte demandante cuenta con otros medios de prueba para corroborar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

**VII. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

**A. DOCUMENTALES**

- Póliza básica de responsabilidad civil extracontractual No. C 2000257911 y sus condiciones generales.
- Póliza básica de responsabilidad civil contractual No. C 2000257912 y sus condiciones generales.

**B. INTERROGATORIO DE PARTE**

Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a los demandantes Diana Patricia González (Lesionada), Juan Carlos Grisales Tobar (Cónyuge), Juan Carlos Grisales González (hijo), María

Teresa Preciado (Madre), Gregorio González Valencia (Padre), Rodrigo González Preciado (hermano), Cindy Carolina González Preciado (Hermana), Diego Fernando González Preciado (Hermano).

De otro lado, por la parte demandada, solicito el interrogatorio del señor Walter Hernán Vargas (conductor), al representante legal de Bancolombia S.A. (propietario), al representante legal de Expreso Brasilia S.A., para que en audiencia pública absuelvan el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito, le formularé sobre los hechos de la demanda.

### **C. TESTIMONIALES**

Respetuosamente me permito solicitar decretar el testimonio de la doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, identificada con la cédula de ciudadanía 1.061.751.492 de Popayán, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán, y puede ser citada en la Carrera 2 Bis No. 4-16, o en la dirección electrónica [darlingmarcela1@gmail.com](mailto:darlingmarcela1@gmail.com) cuyo objeto de prueba del testimonio será declarar sobre las características la Póliza vinculada al proceso, sobre la ausencia de cobertura material y exclusiones, y sobre los hechos objetos de litigio; los límites a los valores asegurados, el deducible, la cobertura temporal de la póliza y sobre los demás aspectos relevantes sobre el particular.

### **D. DECLARACIÓN DE PARTE**

En virtud de lo establecido en el artículo 165 y 198 del Código General del Proceso, solicito se decrete la declaración de parte del Representante Legal de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, del llamamiento en garantía y las excepciones formuladas. El representante legal podrá ser citado en la Calle 33 # 6b - 24, en la ciudad de Bogotá. Dirección de correo electrónico [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co).

### **E. DICTAMEN PERICIAL DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO**

En los términos del artículo 227 del Código General del Proceso anuncio que haré uso de la prueba pericial consistente en la reconstrucción de accidente de tránsito a fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el accidente en el que supuestamente se lesionó la señora Diana Patricia González y apoyar la tesis sustentada en esta contestación. Anuncio el uso de esta prueba en los términos antes referidos, comoquiera que, el término de traslado es insuficiente para aportar un dictamen de esta categoría.

La prueba pericial es conducente, pertinente y útil por cuanto es funcional para verificar desde un punto de vista técnico, los hechos acaecidos el 4 de octubre de 2024, donde se vio involucrado el vehículo conducido por el señor Walter Hernán Vargas. Criterio técnico que permite acreditar la ocurrencia y causas del accidente a partir de una óptica científica en uso de la física y otras ciencias aplicadas que permiten reconstruir fielmente las situaciones e hipótesis que rodearon el accidente de tránsito el cual es objeto del litigio.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término

no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso respecto a la geometría de la vía, estudiar la presencia de señales de tránsito, el límite de velocidad de la vía, la visibilidad de la misma, del IPAT aportado con la demanda, y de los documentos que al proceso remita la fiscalía relacionados con la investigación del accidente conforme a la solicitud que ha elevado la parte demandante.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juez proceder de conformidad.

#### VIII. ANEXOS

1. Poder general otorgado al suscrito por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. mediante escritura Publica No. 13771 de la Notaría 29 de Bogotá para representar a la compañía aseguradora en el presente trámite.
2. Certificado de existencia y representación legal de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Cali.
3. Las demás relacionadas en el acápite de pruebas.

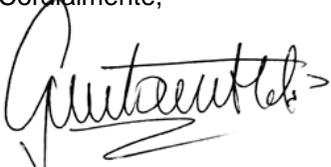
#### IX. NOTIFICACIONES

La parte demandante, en el lugar indicado en el escrito demandatorio.

Mi representada, COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. en la Calle 33 # 6b - 24, en la ciudad de Bogotá.  
Dirección de correo electrónico [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co).

El suscrito recibirá notificaciones en la secretaria de su despacho o en la Avenida 6ª Bis No.35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**

C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.